



NUE 3-A-2020 (CE)

contra Dirección General de Centros Penales (DGCP)

Resolución definitiva

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP):** San Salvador, a las nueve horas con doce minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

***Descripción del caso:***

resentó recurso de apelación contra la resolución bajo referencia UAIP/OIR/0402/2019, emitida el día 18 de diciembre de 2019 por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales**, que denegó la información concerniente al:

*"Copia de los atestados o credenciales del señor [REDACTED] Jefe de Registro Penitenciario".*

I. Al respecto, señaló que la oficial de información del ente obligado le comunicó lo informado por el Jefe de Recursos Humanos de la **DGCP**, en el sentido que no se le podía entregar dicha información porque el señor [REDACTED] había presentado renuncia a su cargo.

Por su parte, la apelante se mostró inconforme con dicha resolución, pues mencionó que el 8 de enero de este año, logró constatar que el señor [REDACTED] seguía siendo empleado de la **DGCP**. Asimismo, señaló que el jefe de recursos humanos actuó con negligencia en el trámite de su solicitud de información al ocultar información oficiosa de ese ente obligado, por lo que finalmente solicitó que se ordene a la **DGCP** la entrega de la información solicitada y que se imponga la respectiva sanción al jefe de recursos humanos, quien – a su criterio – mintió deliberadamente en aras de ocultar información.

II. En esa línea, este Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada **Claudia Liduvina Escobar Campos** para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. De igual forma, se ordenó la certificación del expediente para tramitar el procedimiento sancionatorio solicitado por la apelante.



En el informe rendido por la DGCP de conformidad con el Art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), suscrito por [REDACTED] en su calidad de apoderado especial del Director General de Centros Penales, Osiris Luna Meza, se manifestó, en lo medular: a) que en relación a los argumentos expuestos por la señora de Quinteros (Sic.) en cuanto a que se le entregó información incompleta, la DGCP estima que en ningún momento han pretendido obstaculizar el libre acceso a la información de la ciudadana, sino que ellos han aplicado el Art. 31 de la LAIP, el cual en su parte final expresa: “el acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante”, ello en razón que el señor [REDACTED] ya no forma parte del conjunto de empleados de esa Institución, quien presentó su renuncia el pasado 29 de noviembre de 2019, y la misma surtía efectos el día 4 de diciembre del mismo año (documento que anexa a su escrito); b) que en línea con lo anterior, nos encontramos ante un escenario de autodeterminación de la información de un ex empleado de la DGCP, en tanto el ámbito de protección de este derecho no puede limitarse a determinado tipo de datos – sensibles o íntimos –, pues lo decisivo es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga. Es decir, la vulneración al derecho en mención depende de la finalidad que dicha actividad persiga y de los mecanismos de control que al efecto se prevean [...]; al respecto, citó la sentencia N° 35-2016, de fecha 12/05/2017 emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que desarrolla el derecho a la autodeterminación informativa; c) que si bien es derecho de los ciudadanos solicitar información sin expresar su interés de conformidad al Art. 2 de la LAIP, es importante considerar que la información solicitada versa sobre una persona que ya no ostenta ningún vínculo laboral, es decir, no existe salario, subordinación-dependencia o exclusividad de por medio entre la DGCP y el señor [REDACTED]. Por tal motivo, liberar información de una persona que no ostenta un cargo público, conllevaría una violación a la esfera jurídica de un tercero, el cual goza de una protección constitucional; y al respecto, cita los Arts. 6 letra “f” y 24 de la LAIP relativos a la información confidencial, en el sentido que la información solicitada es confidencial, según lo expuesto, y por consiguiente, la misma no puede ser revelada según lo dispuesto en los Arts. 28 y 76 letra “b” de las infracciones muy graves; d) que bajo la premisa que la ley no puede exigir un comportamiento que al mismo tiempo es sancionado, se brindó respuesta en su momento a la apelante, tal y como la ley lo establece; por lo que esa Dirección General se aleja de las acusaciones realizadas por [REDACTED].

de Quinteros, mismas que han conllevado el inicio de un procedimiento sancionatorio contra el señor [REDACTED], en vista que – al decir de la apelante – “mintió deliberadamente en aras de ocultar información”, y bajo esa lógica, solicita que se desestime el presente procedimiento y el sancionatorio bajo la referencia NUE 4-D-2020 (AG). Seguidamente, ofreció como prueba: “copia certificada por Notario de la renuncia presentada por el [REDACTED] y de la Acción bajo la referencia R/009, firmada por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, [REDACTED]”.

III. Llegado el día de la audiencia, compareció la apelante [REDACTED] y el apoderado especial de la DGCP, licenciado [REDACTED], ambos por medio de la plataforma “Meet” de Google y manifestaron no tener incidentes que interponer para la no realización de la misma.

Durante la etapa de ofrecimiento de medios probatorios que no habían sido incorporados previamente al expediente, la apelante ofreció como prueba: “audio grabado el día 8 de enero de 2020, de la entrevista realizada al licenciado [REDACTED], Jefe de Registro Penitenciario de la DGCP”, con el que pretende comprobar que a esa fecha él reconoció que seguía siendo empleado de dicha Institución. Por su parte, el apoderado de la DGCP, ofreció como prueba documental: “versión pública de la resolución del Juzgado 9º de Paz de San Salvador” (un folio útil), con la que pretende comprobar la existencia de un procedimiento penal en existencia para que este Instituto lo valore a la hora de emitir resolución definitiva. Luego de correr traslado a ambas partes y escuchar los argumentos expuestos por cada una de ellas, el Pleno procedió a deliberar sobre la admisibilidad de la misma, teniendo en cuenta los criterios de pertinencia y utilidad de la prueba, de conformidad a los Artículos trescientos dieciocho y trescientos diecinueve del Código Procesal Civil y Mercantil. Finalmente, el Pleno decidió rechazar la documentación ofrecida como prueba por ambas partes, de conformidad al Artículo trescientos dieciocho y trescientos veinte ambos del Código Procesal Civil y Mercantil, expresando los motivos de su decisión y la debida fundamentación para cada uno de los documentos aportados.

En la etapa de alegatos, la apelante expuso en lo medular: a) que tal como lo planteó a este Instituto en su escrito presentado en enero, la información que se le ha negado debería de ser pública, por ser información del currículo de una persona que en ese momento era



empleado público y ocupaba un cargo con funciones sumamente importantes; b) que en un momento esta información constaba en el portal de transparencia de la DGCP, en donde se encontraban enumerados los títulos y diplomas del señor [REDACTED] y es por ello que ella solicitó estos documentos, para que le complementaran lo que ellos mismos habían publicado; d) que de ser cierto el hecho que el señor [REDACTED] ya había renunciado cuando ella interpuso su solicitud, no es impedimento para entregar la misma, pues esta estaba en poder del ente obligado, y por ello cita la resolución 60-A-2019 emitida por este Instituto, la cual es un ejemplo de como las instituciones si pueden entregar este tipo de información aun cuando un servidor público ya no labora para las mismas.

Por su parte, la representación del ente obligado señaló en lo medular, lo siguiente:

a) que respecto a la protección de datos personales sensibles, existen tres disposiciones destacadas en la LAIP: art. 6 letra “b”, 10 numeral 3, 6 letra “g”; b) que según el caso que nos ocupa, se informó a la señora [REDACTED] que el señor [REDACTED] ya no laboraba para la DGCP, pues él presentó su renuncia el 29 de noviembre del año 2019, la cual surtiría efectos a partir del 4 de diciembre del mismo año, documento que corre agregado en el presente procedimiento, por lo que al no existir una prestación de servicios dentro del administración del Estado, no puede considerarse como servidor público a la luz del art. 6 letra “g” de la LAIP, y por ende, no forma parte de la información oficiosa del art. 10 numeral tres de la misma ley, por lo que no es susceptible de divulgación; c) que en ese sentido, considera que lo que está en juego en este procedimiento es el derecho a la protección de datos personales sensibles de una persona natural, cuya divulgación podría afectar el derecho al honor, a la imagen, a la intimidad personal y familiar de esta persona, más cuando se trata de brindársela a una persona que forma parte de un medio de comunicación digital, en donde ya se ha publicado notas con aseveraciones respecto del señor [REDACTED] como de esa Dirección General; lo anterior, en detrimento del principio constitucional(Sic.) de presunción de inocencia del art. 12 de la Constitución de la República, entre otros; d) que la apelante no ha demostrado contar con el consentimiento del señor [REDACTED] para manipular en esta circunstancia la información, ni ha señalado los fines con los que pretende obtenerla, lo cual excede la esfera de privacidad de las personas; e) por lo que si de entregar los atestados del señor De la O se trata, como persona natural y no como servidor público, deberá ser este Instituto quien resuelva, teniendo en cuenta lo expresado de su parte; f) ahora bien, respecto

de la prejudicialidad, expone que es un hecho notorio que se ha iniciado un procedimiento penal en contra del señor [REDACTED] en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, en el que se ha resuelto, entre otros aspectos, pasar a la etapa de instrucción, por lo que este Instituto deberá valorar la suspensión de este procedimiento para no entorpecer el proceso penal.

Como alegato final, la apelante mencionó: a) que le sorprende este nuevo alegato de la DGCP en tanto alegan que lo solicitado consisten datos personales, pues de haber sido ese el punto, debieron ser ellos quienes tenían que preguntarle su consentimiento al señor [REDACTED], pues son ellos quienes tienen esa información en su poder, y es a ellos, como ente obligado, a quienes les compete hacerlo y no a ella como ciudadana, lo cual no consta en el expediente que lo hayan hecho, o al menos en la resolución de información que le entregaron nunca se le plantearon esos argumentos; b) que en vista que el apoderado del ente obligado hizo mención a la nota periodística de la cual ella es autora, señaló que le preocupa que aun cuando la FGR ha identificado indicios de la gravedad de los señalamientos que se hacen en esa publicación periodística y que fueron armados por medio de solicitudes de información realizadas a otras instituciones, se siga queriendo ocultar esta información, pues al margen de que esta persona ya no pertenezca a esa institución, este es un asunto de interés público porque de llegarse a comprobar los hechos que se le acusan al señor [REDACTED] queda en evidencia lo frágil puede ser el sistema de recursos humanos en las instituciones; c) por lo anterior estima que es importante que este Instituto sienta un precedente, porque en la medida que los ciudadanos tengan más información sobre los procesos de contratación y toda la documentación que las instituciones coleccionan de las personas que van a ejercer funciones tan delicadas como la que tenía el señor [REDACTED], las instituciones puedan ser más precisas (Sic.) con toda información que respalden, y que los funcionarios cumplan con las competencias y moralidad notoria que debe tener un empleado público. Concretamente, solicitó que este Instituto entregue la información que solicitó en su momento.

Por su parte, el apoderado del ente obligado señaló como alegato final: a) que a la señora de Quinteros le dieron respuesta el 16 de diciembre de 2019, siendo la desvinculación laboral del señor [REDACTED] el motivo por el cual no se le entregó la información concerniente a él; y b) que su petición concreta es: que se desestime el proceso sancionatorio incoado por y vinculado con el presente procedimiento, que se sobresea definitivamente a la





DGCP en el presente procedimiento de apelación y que sea este Instituto si se debe entregar la información solicitada a la señora de Quinteros, pese a los argumentos expuestos.

Finalmente, en etapa de preguntas, la Comisionada Yanira Cortez consultó al apoderado de la DGCP: ¿Podría señalar el período en el cual el señor [REDACTED] trabajó como Jefe de Registro Penitenciario en la DGCP? A lo cual el Licenciado [REDACTED] respondió que laboró del 12 de julio de 2019 al 4 de diciembre de 2019.

Seguidamente, la Comisionada Liduvina Escobar también le consultó: a efecto de aclaración ¿Qué parte de los atestados o las credenciales del señor [REDACTED] consideran que son datos personales sensibles? Amplie. A lo cual el Licenciado [REDACTED] respondió: que es la conformación todo el expediente laboral del señor [REDACTED] incluido el tema de los atestados, pues ellos consideran que es información sensible, no solo por el hecho de que hay un proceso paralelo a este en materia penal, en donde se discute la situación jurídica de esta persona; y por ello, en determinado momento valoraron que por el acceso a los medios de comunicación que se puede tener por la parte apelante, más cuando la apelante no acreditó las razones o los fines por los cuales está solicitando el acceso, lo cual estima que es algo importante que debió delimitar, implica que se podría poner en riesgo los derechos que mencionó en su momento.

Finalmente, la Comisionada Cristina Pérez también le consultó al licenciado Hernández, que con base a lo contestado por él a la pregunta de la Comisionada Escobar, en tanto mencionó que los atestados del señor [REDACTED] son datos personales sensibles, le surgió la siguiente duda: en el requerimiento de información original de la apelante, se solicitaba la copia de los atestados de todas las Jefaturas de la DGCP, a lo cual, entregaron los atestados de todas las Jefaturas, entonces, le solicitó que le aclarara ¿por qué los atestados de las demás jefaturas no son datos personales sensibles (pues estos fueron entregados en su momento) pero los del señor [REDACTED] sí? A lo cual el licenciado Hernández respondió: que ello obedece a que el señor [REDACTED] ya había presentado su renuncia, por lo que consideraron que no podría entregarse esa información en virtud que él ya no formaba parte de la administración pública.

En relaciona lo anterior, por motivos de falta de conformación del Pleno de este Instituto para poder dictar resolución del caso, en vista que la comisionada Silvia Pérez por haber presentado su renuncia su renuncia irrevocable ante este Instituto y la comisionada

Cesia Mena estando suspendida de su cargo por un procedimiento de remoción, se llevó a cabo la repetición de la Audiencia Oral el día martes veinticuatro de noviembre del corriente de conformidad a lo establecido en los art. 94 y 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en relación al art. 106 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), y en aplicación del principio de inmediación establecido en el art. 10 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), que exige de parte del juzgador una correlación directa entre la producción de prueba y la emisión del acto decisorio y artículos Arts. 211 Inciso final y 214 del CPCM.

Siendo así, se celebró audiencia con la comparecencia de los apoderados del ente obligado Licenciados [REDACTED] y [REDACTED], mas no con la comparecencia de la apelante habiendo sido notificada en legal forma. En el desarrollo de la misma fueron planteados incidentes por parte de los apoderados de la DGCP, resolviendo la no admisión de estos de acuerdo a los motivos expuestos por este Instituto, los cuales consta en el acta de audiencia.

***Análisis del caso:***

Para el análisis que nos concierne, este Instituto ha determinado su pronunciamiento respecto a: *si la copia de los atestados del señor [REDACTED] ex Jefe de Registro Penitenciario de la DGCP, es información pública o, si por el contrario, al tratarse de un ex servidor público obedece a datos personales sensibles sujetos a confidencialidad.* En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Breve referencia al derecho de acceso a la información pública (DAIP) y de la información confidencial; y, (II) Análisis del caso en concreto.

I. En ese orden, es preciso recordar que el DAIP tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, reconocida tanto nacional como internacionalmente en vasta jurisprudencia. Por lo tanto, corresponde a este Instituto, como garante de ese derecho, realizar la labor de armonización y determinación de su alcance, así como la ponderación cuando este entre colisión con otros derechos fundamentales con cuya esfera de aplicación interactúa, especialmente cuando deba pronunciarse sobre la validez de restricciones a dicho derecho.



1. Es importante mencionar que, la Sala de lo Contencioso Administrativo reconoció que como regla general toda la información que resguarden los entes obligados en el desempeño de sus funciones institucionales, debe ponerse a disposición del público y la negativa injustificada de su entrega, podría constituir una afectación al DAIP, y un incumplimiento legal<sup>1</sup>.

Ahora bien, el DAIP no es una prerrogativa absoluta, su interacción con otros derechos de igual rango posibilita escenarios de restricciones justificadas. En este sentido la LAIP regula las limitantes para acceder a la información pública, que en términos generales se clasifican en: la información reservada –Art. 19-; información confidencial (en todas sus dimensiones) –Art. 24-; y la información inexistente –Art. 73-.

Por otro lado, toda restricción al DAIP debe analizarse tomando en cuenta el principio de máxima publicidad consagrado en el Art. 4 de la LAIP, es decir, que toda la información en poder de las entidades obligadas es pública, salvo que cuente con algunas de las excepciones contempladas en la misma Ley. En tal sentido, la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos ha establecido que los Estados tienen la carga de la prueba en demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión<sup>2</sup>. También lo ha afirmado el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, al establecer que, “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”<sup>3</sup>. Lo anterior, a efecto de generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado, debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo, en el establecimiento de restricciones al derecho<sup>4</sup>.

En este orden de ideas, corresponde al ente obligado demostrar de manera fehaciente la aplicación de cualquiera de las causas de restricción al derecho de acceso a la información,

---

<sup>1</sup> Sentencia definitiva de fecha 28 de enero de 2019 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, referencia 408-2016.

<sup>2</sup> Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 93.

<sup>3</sup> Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73º Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7.

<sup>4</sup> Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. *Op.cit.*



incluidos aquellos para considerar que una información es confidencial, como en el caso que nos ocupa.

2. La LAIP define como información confidencial de acuerdo al Art. 6 letra "f", como *"aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido"* (resaltado suplido). De lo anterior, es importante resaltar que dicha disposición contiene ciertos elementos para considerar que la información es confidencial, el primero que sea privada, pero además que pueda ser protegible en razón de un interés personal.

No obstante, este tipo de información tampoco es absoluta y cede ante intereses constitucionalmente relevantes siempre que el acceso esté justificado.

II. Una vez establecido lo anterior, corresponde determinar la naturaleza pública o confidencial de los atestados del señor [REDACTED]

1. En primer lugar, el ente obligado alega que, debido a que el señor De la O tobar presentó renuncia a su cargo en fecha 29 de noviembre de 2019, misma que surtió efectos desde el 4 de diciembre del mismo año, ya no era empleado público de la DGCP y en razón de ello, consideraron que debían resguardar su expediente laboral, al ser los atestados "datos personales sensibles" de esta persona. Asimismo, durante la audiencia oral del caso, el apoderado de la DGCP sostuvo que entregar esta información a la apelante, máxime cuando ella labora para un medio de comunicación digital (prensa), afectaría el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar del señor [REDACTED] y es por ello que la información no debe ser entregada.

Al respecto, el artículo 6 letra "b" de la LAIP define como datos personales sensibles: "los que corresponden a una persona en lo referente al credo, religión, origen étnico, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, situación moral y familiar y otras informaciones íntimas de similar naturaleza o que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad personal, y familiar y a la propia imagen". Es decir, que para que un dato personal sea clasificado como "sensible", este debe afectar la esfera más íntima de su titular.



En esa línea, si nos detenemos a analizar lo alegado por el ente obligado, el origen de su argumento radica en que el señor [REDACTED] presentó renuncia, y, al ya no ser parte de la administración pública, esa información no puede ser revelada por ser privada.

A efecto de acreditar lo anterior, por medio del informe de ley, la DGCP ofreció como prueba: “copia certificada por Notario de la renuncia presentada por el Sr. Luis de Jesús de la O Tobar y de la Acción bajo la referencia R/009, firmada por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, [REDACTED]”. Entonces, con base a este elemento de prueba, valorado conforme a la sección primera del capítulo cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil, se tienen por establecido: *que efectivamente el señor [REDACTED] presentó escrito de renuncia en fecha 29 de noviembre de 2019, solicitando que la misma fuera efectiva a partir del 4 de diciembre de 2019. De igual forma, se evidencia que el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mediante la Acción bajo la referencia R/0009, informó a la Dirección de Recursos Humanos Institucional en fecha 8 de enero de 2020, sobre la renuncia del señor [REDACTED]*

De lo anterior, tenemos que el señor [REDACTED] adquirió la calidad de ex servidor público (al menos como ex empleado de la DGCP según la prueba documental que aportaron) desde el día 4 de diciembre de 2019. Sin embargo, al verificar el expediente administrativo UAIP/OIR/004/2020, a folio uno se advierte que la apelante presentó su solicitud de información ante la UAIP de dicho ente el 25 de noviembre del presente año, es decir, que en esa fecha, el señor [REDACTED] aún seguía siendo empleado de la DGCP, por lo que seguía gozando de la calidad de servidor público en ese momento, pues el vínculo laboral de éste con esa Institución terminó el 4 de diciembre de 2019, tal como la misma documentación del ente obligado lo respalda.

En ese sentido, la entrega de esta información debió efectuarse materialmente el 16 de diciembre de 2019, fecha en la que la oficial de información entregó a la apelante los atestados (títulos o diplomas) de las demás jefaturas que laboraban en ese momento en la DGCP. Es más, aun cuando se admitió el presente procedimiento, la causa penal que se tramita en contra del señor [REDACTED] aún no había iniciado, sino que ello tuvo lugar meses después.

De igual forma, no hay que olvidar que la LAIP tutela el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, el cual es igual de importante que otros derechos que tienen las personas en este país, y, en el caso que nos ocupa, el mismo no se encuentra en conflicto con ningún otro derecho (de ser así implicaría realizar una ponderación del daño entre los mismos).

2. Expuesto lo anterior, cabe preguntarse ¿qué tipo de información consisten los atestados de la hoja de un servidor público?

Para responder a dicha interrogante, diremos en palabras propias que los “atestados” son aquellos títulos, certificados, diplomas, constancias, que certifican los estudios, pruebas, seminarios, etc., que ha cursado una persona, es decir, que estos acreditan o respaldan la formación académica y/o profesional de ésta. Ahora bien, materialmente hablando, cuando tenemos a la vista un “atestado”, los datos descritos en el mismo son (a manera de ejemplo): el nombre de la institución que lo certifica, el nombre de la persona que cursó determinado estudio, la fecha en que es emitido, el logro académico obtenido, el nombre y firma de las personas que certifican el contenido del mismo.

Bajo esa lógica, es fácil advertir que en un documento de este tipo no es tan propicio que se revelen “datos personales sensibles” de los descritos en el Art. 6 letra “b” de la LAIP. No obstante, ello no implica que dependiendo del atestado que se trate no pueda haberse consignado algún dato personal que sea susceptible de ser protegido (excluyendo el nombre de la persona), y para ello, el Art. 30 de la LAIP establece que puede entregarse una versión pública de los mismos.

Sobre este punto, el requerimiento original la apelante era la “copia de los atestados (títulos o diplomas) que respalden las hojas de vida de todas las jefaturas de la DGCP”, información que fue entregada de forma íntegra por el ente obligado, a excepción de lo que se discute en el presente caso.

Es así que, cualquier persona puede utilizar los atestados para respaldar el contenido de su hoja de vida, y en esa misma lógica, los mismos deberían ser exigidos por cualquier institución, para que la unidad correspondiente pueda determinar la idoneidad de una persona para ostentar o desempeñar determinado cargo dentro de la administración pública.

En ese sentido y en aplicación al objeto de controversia, este Instituto ha sostenido



en otros procedimientos relacionados, que las hojas de vida y atestados constituyen información pública, pues con estos no solo se cumple la finalidad de dar a conocer y comprobar la cualificación técnica, profesional y personal que debe examinar el ente competente de la elección de los profesionales, sino también el escrutinio público de la sociedad en dicho proceso<sup>5</sup>.

Asimismo, ya se ha determinado que la función pública exige el escrutinio público,<sup>6</sup> pues es importante que los ciudadanos conozcan la formación académica de dichos funcionarios para que estos puedan conocer dicha formación y ver si cumplen un perfil óptimo para ostentar determinado cargo.

En consecuencia, mediante los criterios de valoración relativos al interés público, el principio de máxima publicidad, integridad, rendición de cuentas, la transparencia y la naturaleza del derecho a la información pública, es pertinente proporcionar a la apelante la *"Copia de los atestados o credenciales del señor [REDACTED] ex Jefe de Registro Penitenciario"* pues ello, constituye información pública, y su entrega favorece a la contraloría social.

Por todo lo anterior, es procedente revocar la resolución de la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales** por no estar apegada a los principios de máxima publicidad, integridad y sencillez, desconociendo los criterios señalados por el IAIP; por ende, se debe ordenar al ente obligado que proporcione la información requerida, de manera íntegra, salvo que alguno de los atestados consigne en su contenido datos personales sensibles, en cuyo caso deberá ser entregado en versión pública, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

#### ***Decisión del caso:***

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, las disposiciones legales citadas, y los artículos 6 y 18 de la Constitución, 52 inciso 3 °, 58 letras b, d y g; 94 y 96 letra "d" de la LAIP; y, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto resuelve:

---

<sup>5</sup> Resolución definitiva pronunciada a las a las catorce horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Ref. NUE ACUM 135, 206, 207 y 244-A-2016.

<sup>6</sup> Resolución definitiva pronunciada a las a las diez horas del veintitrés de julio de dos mil quince. Ref. NUE 69-A-2015.

a) **Revocar** la resolución UAIP/OIR/0402/2019 emitida el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales**, por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) **Ordenar** al titular de la **Dirección General de Centros Penales**, que en el plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, entregue a la ciudadana [REDACTED] la información completa concerniente a: "*Copia de los atestados o credenciales del señor [REDACTED] ex Jefe de Registro Penitenciario*", por ser información de naturaleza eminentemente pública, salvo que alguno de los atestados consigne en su contenido datos personales sensibles, en cuyo caso deberá ser entregado en versión pública, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

c) **Requerir** al titular de la **Dirección General de Centros Penales**, que en el plazo de veinticuatro horas luego de fenecido el plazo del literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento, junto con la documentación pertinente que acredite la entrega de la información y la conformidad de la apelante con la misma. Este informe deberá ser remitido vía electrónica a la dirección de **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto, para que verifique la ejecución de esta resolución.

f) **Publíquese**, oportunamente

*Notifíquese. -*



**PRONUNCIADA POR LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**  
JH/CC/RP



...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veintiuno.

José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

